

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	ANGELA MARIA RESTREPO SALDARRIAGA
DEMANDADOS	COLPENSIONES- PROTECCIÓN S.A. - PORVENIR
RADICADO	05001-31-05-003-2021-00378-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Ineficacia del acto de traslado de régimen pensional
DECISIÓN	Revoca, Adiciona y confirma.

Medellín, treinta (30) de enero de dos mil veintitrés (2023)

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los magistrados ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA, MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA y como ponente MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022 que dispuso adoptar como legislación permanente las normas contenidas en el Decreto Ley 806 de 2020, y surtido el traslado correspondiente, procede la Sala a proferir sentencia ordinaria de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **ANGELA MARIA RESTREPO SALDARRIAGA** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES**, la **AFP PROTECCION S.A.** y la **AFP PORVENIR S.A.**

Después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 003**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, decidir los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante, por la AFP PORVENIR, la AFP PROTECCIÓN y también por

COLPENSIONES, contra la sentencia que profirió el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 05 de septiembre de 2022, y, a su vez, conocer dicha sentencia en grado jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, de conformidad al artículo 69 del CPT y SS.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que la actora nació el 24 de mayo de 1967, y se afilió por primera vez al régimen de prima media con prestación definida a través del Instituto de Seguros Sociales a partir del año 1986, luego decidió trasladarse al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por la AFP PROTECCIÓN S.A. en el año 1995, y posteriormente se trasladó a la AFP PORVENIR, (sin mencionar el año de su afiliación) en donde permanece actualmente.

Se duele que el asesor ejecutivo del RAIS no le brindó la información suficiente para haber tomado la decisión pertinente con la información determinante y ajustada a su situación concreta; y que, al contrario, le ocultaron información relevante para afiliarse al RAIS, por lo que considera que su decisión se encuentra viciada y afectada en su validez, por ausencia del conocimiento sobre las consecuencias jurídicas de su afiliación a dichas administradora.

Finalmente manifestó la parte que la falsa expectativa creada por el asesor del fondo privado y la incertidumbre sobre el ingreso para subsistir luego de la vida laboral le ha causado a la parte demandante un gran impacto emocional, manteniendo un estado de angustia permanente al no tener asegurado un ingreso acorde con la calidad de vida que su salario le ha permitido tener y a su núcleo familiar.

III. – PRETENSIONES

Que se declare la ineficacia y/o nulidad según se demuestre del traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, por lo que resulta ineficaz o nula su afiliación a los fondos privados demandados.

Que se declare que para todos los efectos jurídicos la parte demandante siempre ha permanecido en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida, administrado actualmente por COLPENSIONES, sin existir solución de continuidad en la afiliación, ya que el traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad no puede producir efectos, al no haberse realizado de manera informada, libre y espontánea.

Ordenar a los fondos privados demandados, la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas de dineros, bonos pensionales, cotizaciones, sumas adicionales recibidas por concepto de aportes obligatorios, voluntarios, rendimientos y gastos de administración, seguros, reaseguros generados durante el tiempo en que dichas sumas de dinero estuvieron bajo su administración.

Ordenar a COLPENSIONES reactivar la afiliación de la parte demandante considerando que para todos los efectos legales siempre ha estado vinculada al Régimen de Prima Media con Prestación Definida; recibir las sumas devueltas por los fondos privados demandados; y finalmente, actualizar y corregir la historia laboral de la parte demandante y ponerla a su disposición.

Y condenar a los fondos privados demandados al reconocimiento y pago de los perjuicios morales causados a la parte demandante, los cuales estimó en 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o la suma que el juez considere y condenar en costas a las demandadas.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Una vez admitida la demanda, fue debidamente notificada, procediendo las accionadas a dar respuesta a la misma por intermedio de sus respectivos apoderados judiciales.

COLPENSIONES describió el traslado de esta acción, según consta en el archivo PDF 14 incorporado al expediente digital. A través del mismo, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de esta acción; aceptó la edad de la demandante y su afiliación; propuso las excepciones perentorias que denominó: *"INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE TRASLADO ENTRE REGÍMENES PENSIONALES, INEXISTENCIA DE LA*

OBLIGACIÓN, POR AUSENCIA DE UNO DE LOS REQUISITOS LEGALES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, IMPOSIBILIDAD DE APLICAR PRECEDENTE JUDICIAL Y LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA, PRESCRIPCIÓN, BUENA FE DE COLPENSIONES, IMPOSIBILIDAD DE CONDENA EN COSTAS"

Por su parte la AFP PROTECCION S.A., a través de la contestación allegada (PDF 15 del expediente digital), negó los hechos de la demanda, salvo la afiliación, traslado y edad de la actora, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y, formuló las excepciones de mérito que denominó:

"INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN Y FALTA DE CAUSA PARA PEDIR, BUENA FE, PRESCRIPCIÓN, APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES, RECONOCIMIENTO DE RESTITUCIÓN MUTUA EN FAVOR DE LA AFP: INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVER LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN CUANDO SE DECLARARA LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN POR FALTA DE CAUSA, INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DE DEVOLVER EL SEGURO PREVISIONAL CUANDO SE DECLARA LA NULIDAD Y/O INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN POR FALTA DE CAUSA Y PORQUE AFECTA DERECHOS DE TERCEROS DE BUENA FE, INNOMINADA O GENÉRICA, APLICACIÓN DEL PRECEDENTE SOBRE LOS ACTOS DE RELACIONAMIENTO AL CASO CONCRETO, TRASLADO DE LA TOTALIDAD DE LOS APORTES A PORVENIR"

La AFP PORVENIR S.A., hizo lo propio y contestó la demanda (PDF10), negó todos los hechos de la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, precisando que la afiliación de la parte demandante a la AFP se realizó de manera informada, libre y voluntaria el día 27 de enero de 2011 cuya efectividad inició el día 1 de marzo de 2011. Formuló las excepciones de fondo que denominó: *"PRESCRIPCIÓN, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD, COBRO DE LO NO DEBIDO POR AUSENCIA DE CAUSA E INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, BUENA FE"*

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En audiencia pública celebrada el 05 de septiembre de 2022, el Juez de conocimiento, dispuso:

Primero: Declarar que las administradoras de fondo de pensiones PROTECCION S.A y PORVENIR S.A., no cumplieron con su obligación de diligencia debida y de buen consejo, en favor de ANGELA MARIA RESTREPO SALDARRIAGA, cuando ésta se trasladó del seguro social a PROTECCION S.A y luego cuando se trasladó a PORVENIR S.A., pues no prueban estas entidades suficiente, clara y oportuna información al momento del traslado y a lo largo de la afiliación. **Segundo:** Declarar el perjuicio o menoscabo a la seguridad social en pensiones ocurrido por el incumplimiento de las obligaciones de PROTECCION S.A y PORVENIR S.A., hacia la demandante ANGELA MARIA RESTREPO

SALDARRIAGA. **Tercero:** Declarar la responsabilidad constitucional y profesional de las demandadas PROTECCION.A y PORVENIR S.A., en el daño infligido a la demandante. **Cuarto:** Inaplicar la pérdida del régimen de prima media con prestación definida acaecido en la señora ANGELA MARIA RESTREPO SALDARRIAGA, cuando ésta se trasladó del seguro social a PROTECCIÓN S.A., y a PORVENIR S.A. y en su lugar declarar que la demandante sigue inmersa en el régimen de prima media con prestación definida, pero a cargo de la administradora de pensiones PORVENIR S.A. **Quinto:** Absolver de todas las pretensiones a COLPENSIONES, sin perjuicio de las ordenes que enseguida se le darán. **Sexto:** Ordenar a la AFP PORVENIR S.A., que dentro del mes siguiente a la fecha en que la demandante lo solicite por escrito, le reconozca liquide y pague pensión de vejez, bajo el régimen de prima media con prestación definida y a su vez la demandante, solicitará la pensión de vejez una vez cumplidos los 57 años y allí incluirá su certificado de retiro laboral. **Séptimo:** Ordenar a la AFP PORVENIR S.A, que, dentro del mes siguiente, a la fecha que reconozca y liquide y pague pensión de vejez a la demandante bajo el régimen de prima media, solicite por escrito a COLPENSIONES, elaboración de liquidación de cálculo actuarial con miras a subrogación pensional. Aquí mismo se le ordena a COLPENSIONES que dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que lo solicite por escrito PORVENIR S.A., elabore dicho calculo actuarial pensional y dentro de ese mismo lapso, dos meses, se lo presente por escrito a dicha entidad PORVENIR S.A. Igualmente PORVENIR S.A., dentro del mes siguiente a que reciba por escrito el valor del cálculo actuarial pensional de manos de COLPENSIONES, proceda al pago real y efectivo de el a esta entidad. **Octavo:** Ordenar a PORVENIR S.A., que hasta tanto no reconozca, no liquide y pague efectivamente el valor del cálculo actuarial pensional en favor de COLPENSIONES, continúa obligada a pagar la pensión de vejez bajo el régimen de prima media con prestación definida a la demandante. **Noveno:** Autorizar a PORVENIR S.A. para que dentro del mes siguiente a la fecha en que pague real y efectivamente el valor del cálculo actuarial pensional a COLPENSIONES, recobre por escrito de PROTECCION el 44% de dicho valor, ello de acuerdo con el tiempo que la demandante permaneció en PROTECCIÓN S.A., Aquí mismo se ordena a PROTECCION S.A., que dentro del mes siguiente en que le sea recobrado por escrito el 44%, del valor del cálculo actuarial pagado por PORVENIR a COLPENSIONES lo pague en favor esta entidad PORVENIR. **Decimo:** Autorizar a PORVENIR S.A., a enjugar parte del valor del cálculo

actuarial que aquí se le ordena pagar a COLPENSIONES, tomar para sí, esto es, para PORVENIR, los ahorros pensionales de la demandante, rendimientos financieros bono pensional y cualquier otra suma de dinero que lleguen al haber de la cuenta de ahorros de ésta. **Décimo primero:** No prosperan las excepciones propuestas por las entidades demandadas. Si prospera la excepción de intransmisibilidad de responsabilidad de las AFP hacia COLPENSIONES, propuesta por esta última entidad. **Décimo segundo:** Condena en costas procesales a la AFP PORVENIR S.A., fijando como agencias en derecho la suma de \$4.000.000 a favor de la demandante.

VI. – RECURSOS DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la parte demandante, por la AFP PORVENIR, por la AFP PROTECCION y por el apoderado judicial de COLPENSIONES, es decir, por todas las partes.

Apoderada parte demandante

La apoderada judicial de la demandante manifestó que la sentencia de primera instancia, no se compadece de las pretensiones invocadas, pues si se compara las pretensiones de la demanda con la decisión proferida, salta a la vista que se negaron todas las pretensiones de la parte demandante, toda vez que en ésta se solicitó básicamente la ineficacia, las consecuencias y obligación de Colpensiones de recibir, computar y reconocer la condena de perjuicios.

Expuso la togada que al absolver por completo a Colpensiones, no se declaró la ineficacia, sino que se declaró una responsabilidad del fondo y una indemnización o conmutación a título de indemnización en ese sentido, y si bien es novedosa la decisión del despacho, con absoluto respecto se expresó que no se comparte, pues no se dan los presupuestos para separarse de lo ya consolidado por la jurisprudencia, por lo que pide que se analice detalladamente las pretensiones de la demanda y como fundamento para que se accedan a ellas debe darse por hecho que la demandante no recibió una debida asesoría por lo tanto deberán aplicarse las consecuencias que destaca la ley para estos casos, esto es, que las cosas deban volver a su estado anterior, es decir, antes del

traslado teniendo la afiliación de la demandante en el régimen de prima media sin solución de continuidad.

Respecto al tema de los perjuicios, aseguró la parte reclamante que los mismos deben presumirse ante la situación evidente que afrontan las personas que invocan un traslado, esto es, la angustia y preocupación luego de trabajar por 20 o 30 años, y ven que su congrua subsistencia se ve en riesgo para enfrentar una etapa de su vida como lo es la vejez.

Apelación de la AFP PORVENIR S.A.

El apoderado judicial de la AFP, recurre de manera total la sentencia, en primer lugar, por la declaratoria de ineficacia de afiliación al RAIS, argumentando que como se ha venido exponiendo desde la contestación de la demanda, en este caso no existen razones o no existían razones para tal declaratoria de ineficacia, pues quedó probado que por parte de PORVENIR y en su momento por PROTECCION, quien fue la AFP que materializó el traslado inicial de régimen, que se cumplió con el deber de información que se tenía establecido para la época.

Aseveró además la parte apelante que la demandante estuvo acompañada de asesores comerciales de Porvenir, quienes cuentan con procesos de capacitación para informar a los distintos afiliados o potenciales afiliados respecto del régimen de ahorro individual, por lo cual no es cierto que nos encontremos frente a una persona que desconocía de las implicaciones del traslado de régimen y por tanto no había razones para la declaratoria. Asimismo, se aportó con la contestación de la demanda un formulario de afiliación que contiene la voluntad expresa de la demandante para trasladarse o afiliarse, documento que no fue tachado de falso y se recuerda es revisado y aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Agregó, que no puede perderse de vista que la demandante es una persona plenamente capaz, que contaba con toda la capacidad necesaria y suficiente para informarse de los actos jurídicos que celebró en dos ocasiones en el RAIS.

De otro lado, no se está de acuerdo frente a la orden de reconocer pensión de vejez a la demandante, bajo el régimen de prima media, teniendo en cuenta que se trata de dos regímenes completamente distintos, lo que quiere decir que no es posible que Porvenir liquide una prestación económica atendiendo a las reglas propias de otro régimen pensional, precisamente porque la normatividad es clara y no es posible equiparar los regímenes, pues tienen reglas distintas.

Finalmente solicita que se revoque la condena en costas, pues la entidad en todo momento ha obra de buena fe y acorde con la normatividad vigente.

Apelación de la AFP PROTECCION S.A.

El apoderado judicial de Protección recurrió la sentencia de primera instancia de forma integral al considerar que con base en el precedente de la CSJ, de alguna manera la consecuencia de no demostrar el deber de información por parte de los fondos privados que componen el régimen de ahorro individual es la ineficacia y en dicha línea jurisprudencial, las consecuencias de esa ineficacia es que las cosas deben volver al estado anterior en que se encontraban antes del traslado al régimen de ahorro individual, esto es, al estado anterior.

Puntualizó que, sin desconocer las facultades que cuenta el juez de instancia de apartarse de la doctrina probable y de las facultades ultra y extrapetita consignadas en el código laboral y procesal, se estima que el juez de instancia desborda dichas facultades en el sentido de que al momento en que hace la fijación del litigio impone dos pretensiones que no se encontraban en el escrito inicial de demanda, esto es, la solicitud específica de otorgar una pensión de vejez, teniendo en cuenta que en el escrito inicial no se solicita la pensión, dejando claro que la accionante para el momento de la diligencia cuenta con 55 años de edad y no tiene requisitos cumplidos para obtener la prestación pensional, pero además el tema de la responsabilidad profesional y constitucional en cabeza de los fondos privados a título de indemnización y a favor de la parte demandante.

Agrega que la sentencia y las cargas impuestas a las administradoras del régimen de ahorro individual, en este caso de pagar una prestación pensional a la accionante una vez obtenida la edad de pensión, en el régimen de ahorro

individual con las características que componen el régimen de prima media, no tiene una previsión legal en este sentido, por lo que resultaría ilegal y se desconoce totalmente la naturaleza del régimen de ahorro individual con solidaridad establecida en la ley 100 de 1993 y las posteriores reformas.

Dijo que al momento de la afiliación inicial para el año 1994, se brinda una información contenida en la resolución 1875 de 1997, emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito que consagraba unas reglas específicas para la liquidación de una pensión de vejez en el RAIS, pero esas normas fueron derogadas posteriormente por el mismo legislador a través de la resolución 3099 de 2015, que modificó sustancialmente esas reglas. Nada más esa mera modificación, específicamente cambió el monto que debía existir en las cuentas de ahorro individual para otorgar una prestación pensional y a ello debe sumarse que en el régimen de prima media el legislador ha permitido a través del artículo 21 de la ley 100 de 1993 realizar un cálculo con el ingreso base de liquidación de los últimos 10 años, mientras en el régimen de ahorro individual el cálculo debe ser del promedio de lo cotizado durante toda la vida por la parte accionante. Claramente si se tiene en cuenta estas dos normas, se va a reflejar una diferencia en la prestación pensional, luego entonces habrá de analizarse si efectivamente los fondos privados en la afiliación primigenia para el año 1995, dio una oportuna información, amplia y suficiente.

En lo que atañe a la condena en perjuicios, solicita sea revocada teniendo en cuenta que en la actualidad no se ha ocasionado ningún perjuicio a la demandante, pues ésta no ha cumplido los requisitos para arribar a la edad de pensión, se desconoce si efectivamente la accionante va a seguir realizando cotizaciones o si llegare a faltar; por lo que es imposible que se condene de manera previa a la entidad frente a un hecho futuro y eventual, pues la accionante aún no ha adquirido la edad de pensión, por lo que esos perjuicios no son actuales, aun no se ha materializado y en tal sentido no se es posible adelantarnos. Que, aunque en la demanda se solicita perjuicios a cargo de los fondos por \$200 SMLMV, por la congoja y el menos cabo, no existe prueba sumaria de que la accionante se encuentra pasando un proceso de depresión o que se encuentre en una intervención psicológica debido a la congoja o estrés que éste proceso, máxime si la demandante no cumple requisitos para arribar a la edad de pensión.

Apelación de COLPENSIONES

El apoderado judicial aseveró que, pese a que en la sentencia se indique que se absuelve a Colpensiones de las pretensiones de la demanda, se imponen a la entidad unas ordenes, en relación con las cuales no se está de acuerdo.

Manifestó que lo que buscan estos traslados es un beneficio individual y/o personal y al efectuarse esos traslados se está debilitando el sistema pensional bajo el régimen de prima media administrado por Colpensiones.

Se arguye que no es posible inaplicar un contrato ya que fue dado bajo un consentimiento, causa y objeto lícito y al momento del traslado, la persona conoció de todas las ventajas y desventajas del RAIS, y para ese entonces no era posible calcular la pensión, por cuanto no se sabía el valor exacto a pagar referente a sus cotizaciones.

En cuanto a la orden del cálculo actuarial no se sabe el valor de la pensión porque la demandante no está activa en el RPM, se desconoce el IBL, sus aportes y salarios y en la liquidación falta la técnica jurídica y financiera. Así las cosas, no existe prueba fehaciente que se le esté causando un perjuicio a la demandante, pues la misma solo tiene expectativas pensionales.

En punto de la subrogación dijo que si bien lo que propone el juez es algo novedoso, afectaría los estados financieros del estado.

En lo que respecta a la orden de intercambio información, señaló que esto no es plausible entre entidades Públicas y privadas, porque hay una información pública que constituye reserva del sumario, como lo es el caso de las pensiones.

Alegatos de Conclusión:

Parte demandante:

Pidió la apoderada judicial que se confirme la sentencia, toda vez que la misma se sustentó en los parámetros que ha venido estableciendo la Honorable Corte Suprema de Justicia en la línea jurisprudencial desarrollada desde el año

2008 hasta la fecha, y cuyas decisiones hasta hoy son uniformes, en relación con el caso que nos ocupa, resaltando que en el asunto la parte demandada no cumplió con su deber de información, lo cual incidió directamente en el derecho pensional fundamental de la actora.

En cuanto a los alegatos de conclusión presentados por la AFP PORVENIR, esta sala advierte que se aportaron dos escritos, el primero de ellos suscrito por la doctora MARÍA ALEJANDRA RAMÍREZ OLEA, quien venía actuando en el proceso, allegado el 03 de octubre de 2022, y otro memorial o presentado por el doctor OCTAVIO ANDRES CASTILLO OCAMPO, anexo el 04 de octubre de 2022, a quien se le reconoce personería para actuar. ambos aduciendo condición de abogados inscritos en el certificado de existencia y representación legal de GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S., quien obra como apoderado y representante legal de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

Ahora, en ambos alegatos se expresa como puntos de desacuerdo frente a la sentencia los siguientes: 1) Competencia extra petita y ultra petita del juez de instancia indicando que no son ilimitadas, 2) Declaratoria de la ineficacia, 3) Condena consistente en devolver a Colpensiones los valores recibidos con motivo a la afiliación, incluyendo los dineros descontados por concepto de administración de las cuentas en ahorro individual y 4) Condena en costas.

El apoderado judicial de **COLPENSIONES**, reiteró los argumentos expuestos en su recurso de apelación, solicitando particularmente en este escrito que no se condene en costas a la entidad y que en caso ordenarse el traslado de régimen pensional de ANGELA MARIA RESTREPO SALDARRIAGA, se implora ordenar a las AFP demandadas trasladar a Colpensiones los siguientes valores: 1) Dinero total ahorrado en la cuenta individual de la demandante 2) Intereses y rendimientos desde en que el demandante está realizando los portes a PORVENIR S.A. hasta que los mismos sean trasladados a Colpensiones 3) Lo correspondiente a las Cuotas de Administración 4) Lo correspondiente al porcentaje de Pensión de garantía Mínima 5) Los porcentajes de los seguros previsionales durante todo el tiempo que estuvo vinculado a la AFP PORVENIR S.A. 6) Gastos de Administración 7) Adicional a lo anterior los dineros deben ser indexados.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, se pasa a resolver de fondo, previas las siguientes

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica procesal, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión. - La Ineficacia en el traslado de régimen pensional. -

El objeto central de esta Litis, se extiende a los puntos objeto de inconformismo planteados por las partes en su recurso de apelación; sin embargo, esta Sala se encuentra facultada para revisar todos los aspectos de la condena a COLPENSIONES relacionada con la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional y el derecho pensional de la actor al retorno a prima media, en virtud de la competencia de que se dispone conforme al artículo 69 del CPT y SS., en Grado Jurisdiccional de Consulta.

Partirá la Sala de establecer si el traslado del RPM al RAIS que realizó la demandante, alcanzó o no a producir los efectos jurídicos respectivos.

Sea lo primero referir que la libre escogencia de régimen pensional y el traslado entre regímenes que en tal virtud se efectúe, tiene como presupuesto esencial, el absoluto conocimiento del asegurado sobre las consecuencias jurídicas que se puedan derivar del cambio de régimen pensional, el cual ha de venir suministrado y garantizado por el agente adscrito al respectivo fondo, esto es, es de la propia esencia del acto de traslado, el suministro cabal y absoluto de toda la información, incluyendo el asesoramiento sobre todas las implicaciones pensionales y consecuencias que para el caso concreto pueden darse, ya que se trata de una decisión relevante de la cual depende el futuro pensional del asegurado.

Esto lleva a la Sala a subrayar, que las obligaciones de asesoría no fueron creadas por el Legislador a través de recientes normas, sino que desde la propia concepción dualista de dos regímenes pensionales a través de la Ley 100 de 1993, se establecieron como de su propia esencia.

Así, la asesoría a cargo de la administradora, se erige en una obligación insoslayable, teniendo en cuenta la trascendencia e importancia de los efectos económicos que puede representar una decisión de tal naturaleza.

En términos generales, es preciso referir que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha venido desarrollando la tesis sobre la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales, y a través de las sentencias SL 1452 del 3 de abril de 2019 y SL 1688 del 8 de mayo de 2019, ha consolidado su línea jurisprudencial, la cual venía desarrollándose –en su orden- a través de las Sentencias SL 31.989 del 8 de septiembre de 2008, SL 33.083 del 22 de noviembre de 2011, SL 46.922 del 3 de septiembre de 2014, SL 19.447 del 27 de septiembre de 2017, y SL 17.595 del 18 de octubre de 2017, decantando que el deber de información es ineludible; que este tema a nivel procesal se rige por condiciones probatorias que le imponen a la respectiva administradora de pensiones acreditar en el juicio que en cada caso concreto sí adelantó la respectiva asesoría; que el primer acto de voluntad es el que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en el traslado de régimen pensional, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se hubieren brindado a los asegurados, después de haber tomado la decisión inicial; que la simple suscripción de un formulario de traslado no denota un proceso serio y cabal de asesoría; no es necesario ni que el asegurado se encuentra ad portas de consolidar el derecho pensional, ni que necesariamente tenga que tener el beneficio del régimen de transición (SL2611-2020 y SL5525 -2021).

Es importante destacar que, el primer acto de voluntad que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en el traslado de régimen pensional, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se le brinden al asegurado, después de haber tomado la decisión inicial, o por el hecho de que el asegurado se haya trasladado incluso entre varias administradoras pertenecientes al régimen de ahorro individual con

solidaridad, como ocurrió en el presente caso, ya que *“la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad, por lo que un dato será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad”* (Sentencia CSJ SL 1688 de mayo de 2019).

A partir de lo anterior, pasa a desatarse la alzada conforme al...

CASO CONCRETO

Sea lo primero reseñar, que, conforme a la prueba documental obrante en el plenario, se advierte que la señora ANGELA MARIA RESTREPO SALDARRIAGA, se vinculó al entonces Instituto de Seguros Sociales desde el año 1986, según se advierte en la historia laboral expedida por COLPENSIONES (PDF 12) y se trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad a través de la AFP PROTECCIÓN S.A. en el año 1995 (PDF 15 folio 39ss), y luego se trasladó a la AFP PORVENIR S.A. en el año 2011 (PDF 10 folio 47) donde permanece afiliada en la actualidad.

Se tiene que, de las argumentaciones esbozadas por el A quo en la sentencia de primera instancia, las referidas a la ineficacia y a las obligaciones profesionales que recaen en cabeza de las administradoras de pensiones, son acertadas.

En efecto, es bien sabido, que el simple hecho de la firma del formulario de afiliación no es una prueba certera de que hubiere existido un verdadero cumplimiento por parte de los fondos privados en sus obligaciones profesionales de asesoría (Sentencias SL 31.989 del 8 de septiembre de 2008, SL 33.083 del 22 de noviembre de 2011, SL 46.922 del 3 de septiembre de 2014, SL 19.447 del 27 de septiembre de 2017, y SL 17.595 del 18 de octubre de 2017); que, para la época del traslado de la demandante, tal y como se refirió en precedencia, es evidente que eran exigibles estas obligaciones de asesoría, siendo preciso concluir que el acto de traslado del régimen de prima media con prestación definida, al régimen de ahorro individual a través de las AFP demandadas, no produjeron los efectos jurídicos pertinentes.

Se resalta que la ineficacia se erige en una sanción de pleno derecho, que se atribuye a la falta de cumplimiento de las obligaciones profesionales de las administradoras del régimen privado, al no haber suministrado la información y asesoría pertinentes, en la oportunidad procedente, y no en otra posterior. Obligaciones que han existido desde que se promulgó la Ley 100 de 1993.

Ahora bien, los apoderados judiciales de las demandadas PROTECCIÓN y PORVENIR y el apoderado de COLPENSIONES, argumentan en su recurso de alzada que las AFP cumplieron con los requisitos de fondo y forma que se exigían para el momento en que se produjo el traslado, es decir, con el deber de información y buen consejo.

Pues bien, para la Sala la Ley 100 de 1993 como norma especial que regula esta situación, es la que comprende las exigencias y condiciones de validez de las afiliaciones a las administradoras del régimen privado y la que impone el acompañamiento al asegurado, resaltándose además que las obligaciones de asesoría y acompañamiento siempre han existido desde que se crearon los dos regímenes pensionales en la Ley 100 de 1993, sin que pueda decirse que se estén haciendo retroactivas obligaciones que solo se hayan impuesto en recientes normas jurídicas.

Ahora bien, sostienen los apoderados de PORVENIR y COLPENSIONES que el traslado de la demandante se dio de manera libre y voluntaria y sin la afectación de ningún vicio del consentimiento.

En relación con este disenso debe tenerse en cuenta que, a pesar de que la solicitud de vinculación se encuentre signada por el afiliado, y allí se indique que la selección se produjo de manera libre, espontánea y sin presiones, si tal decisión no se adoptó con el pleno conocimiento de lo que ello entrañaba, no puede predicarse que la selección hubiere tenido tales características.

De manera que, para la Sala, las AFP demandadas no dieron cumplimiento a la ley por el simple hecho de haber suscrito un formulario de afiliación, pues en el plenario no obra ninguna prueba que indique que la actora se le brindó asesoría de la que se ha hecho referencia. No se trata de desconocer el valor probatorio que el referido documento pueda tener, el cual por demás no fue tachado de

falso, y es incontrastable en el marco de lo que representa, pero de ahí a que se tenga como indicativo de que haya existido **asesoría, buen consejo y acompañamiento**, la sala encuentra que no les asiste razón a los apoderados judiciales reclamantes.

En consideración a lo expuesto, para este Colegiado, la ineficacia en la afiliación al RAIS de la demandante, se configura, a raíz de la afiliación ausente de información por parte de las AFP demandas, quienes tampoco acreditaron en los términos que determina el artículo 167 del C.G.P, haberle brindado a la actora un acompañamiento suficiente en su proceso de traslado de régimen.

Sin embargo, a los apoderados judiciales de las parte partes, les asiste razón en el reproche general que le hacen a la sentencia de primera instancia, solicitando incluso de forma subsidiaria que, en caso de que se confirme la declarada ineficacia, se le dé el alcance que todos los casos en su mayoría tienen conforme a la jurisprudencia nacional, y no la inapropiada forma jurídica que concluyó la sentencia de primera instancia, al haber ordenado un cálculo actuarial que, en su sentir de forma contraria a la Ley 100 de 1993, ordena que una administradora del RAIS reconozca y pague la pensión de vejez bajo unas reglas completamente ajenas y atípicas como las contenidas en la Ley 100 de 1993.

Esta sala acoge los reparos de los recurrentes a la sentencia, y advierte un desbordamiento a la línea jurisprudencial sobre el tema en que incurrió el A quo, que más que corresponder al sostenimiento de una postura con la suficiente carga argumentativa, constituye una suerte de escenario en el que se lleva a extremo el principio de responsabilidad jurídica y presenta ciertos inconvenientes en la práctica, de cara al funcionamiento legal que cada uno de los dos regímenes pensionales excluyentes que creó el legislador a través de la Ley 100 de 1993, al pretender imponer a una administradora del régimen de ahorro individual (AFP PORVENIR S.A.) un reconocimiento pensional bajo las reglas del régimen de prima media con prestación definida, ordenando de por medio la liquidación de un cálculo actuarial completamente impropio para estos casos¹.

¹ El tema de la subrogación pensional, al tenor de lo establecido en las sentencias de casación SL 16.838 de 2016, SL 4.103 de 2017 y SL 4.934 de 2017, entre otras, se refiere a aquellos casos de empleadores que tenían a cargo el reconocimiento de pensiones de conformidad al artículo 260 del CST., y que con motivo de la derogatoria de dicha disposición por virtud del artículo 289 de la Ley 100 de 1993, se subgaron en COLPENSIONES para el reconocimiento a cargo de esta entidad de las pensiones correspondientes.

La solución que el juez de primera instancia dio al caso no resulta consecuente con la figura de la ineficacia, en tanto es evidente que la misma trae como consecuencia la ausencia de la existencia del acto de afiliación, y nunca el que se pueda llegar a entender que una administradora del RAIS frente a la cual existió ineficacia en el acto de afiliación, pueda llegar a ser la pagadora de la pensión bajo una dinámica financiera completamente ajena al régimen.

Así las cosas, sin que exista duda en cuanto a que hay unas obligaciones de asesoría y buen consejo en cabeza de las AFP que se erigen en inexorables en el despliegue de su actividad, creadas desde la misma concepción de los dos regímenes pensionales, y no a partir de recientes normas, cuando las mismas no se cumplen, se genera la consecuencia jurídica de la ineficacia, como una sanción propia en materia del trabajo y de la seguridad social, este colegiado revocará la orden de pagar cálculo actuarial con fines de subrogación, por ser una solución jurídica totalmente injustificada y que contraría la fuente legal con base a la que cada régimen pensional funciona de manera independiente y con fundamento en sus propias normas y reglas jurídicas.

En consecuencia, esta Sala **CONFIRMARÁ** el numeral 1º, de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, en cuanto, declaró que las AFP PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A., faltaron a su deber legal de asesoría en el traslado de régimen de la demandante. **REVOCARÁ** el numeral 4ª de la parte resolutive de la sentencia de primer grado, para en su lugar, **DECLARAR LA INEFICACIA** del traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, efectuado por la actora a través de PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A. entendiéndose, por tanto, que la demandante siempre ha permanecido afiliada al régimen de prima media con prestación definida administrado por COLPENSIONES, sin solución de continuidad.

De otro lado, serán **REVOCADOS** los numerales 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º de la parte resolutive de esa misma sentencia, en los que se declaró que las AFP demandadas causaron grave daño, perjuicio o menoscabo, es decir disminución o limitación a la seguridad social en pensiones de la demandante, se declaró la responsabilidad constitucional y profesional de las AFP, en el daño o perjuicio causado a la demandante en su mesada pensional, se absolvió de todas

las pretensiones a Colpensiones, se le impuso a la AFP PORVENIR S.A. la obligación de reconocer la pensión de vejez a la demandante bajo las reglas de un régimen completamente ajeno a esa entidad y pagar un cálculo actuarial con fines de subrogación pensional a COLPENSIONES y se ordenó a PROTECCION S.A., que dentro del mes siguiente en que le sea recobrado por escrito el 44%, del valor del cálculo actuarial pagado por PORVENIR a COLPENSIONES lo pague en favor esta PORVENIR; **para en su lugar, ORDENAR a la AFP PORVENIR S.A.**, trasladar a COLPENSIONES, todos los dineros que reposen en la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluyendo las cotizaciones completas con sus respectivos rendimientos financieros y comisiones por administración, fondo de garantías para pensión mínima y pagos de seguro y reaseguro. A su vez se ordenará a la **AFP PROTECCIÓN S.A.**, trasladar a COLPENSIONES, las cuotas de administración, las primas previsionales y los porcentajes del fondo de garantía de pensión mínima.

Asimismo, se dispondrá **ordenar la indexación** a cargo de las AFP demandadas; **PORVENIR y PROTECCIÓN**, sobre las cuotas de administración, las primas previsionales y los porcentajes del fondo de garantía de pensión mínima, en tanto COLPENSIONES no tiene por qué recibir sumas depreciadas por estos conceptos, teniendo en cuenta la siguiente formula:

ÍNDICE FINAL

ÍNDICE INICIAL x VALOR A INDEXAR – VALOR A INDEXAR

Esta medida de actualización monetaria ha sido reiterada recientemente por la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia en Sentencias SL3202, SL3709, SL3710 y SL3769 de 2021, criterio que acoge esta Colegiatura, recogiendo en consecuencia cualquier otra interpretación en sentido contrario que se hubiere sostenido en el pasado.

Del mismo modo, se ordenará a las administradoras, que dicho traslado se lleve a cabo por las **AFP PORVENIR y PROTECCIÓN**, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, y que, tales entidades trasladen esos recursos a COLPENSIONES con la **relación discriminada de los conceptos**, con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Las anteriores decisiones, se tornan plausibles por cuanto se impone la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera de la entidad pública codemandada que será quien asuma las futuras prestaciones económicas de la seguridad social que deban pagársele a la demandante, lo cual tiene sustento en la sentencia del 29 de julio de 2020, SL 2877, de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en Radicación 78.667, MP. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, que dijo que *“la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida...”*.

Indemnización de perjuicios

Por otra parte, procede a enjuiciarse el último punto de apelación de la apoderada judicial de la parte demandante, quien aseguró en su recurso de alzada que los perjuicios invocados en la demanda deben presumirse ante la situación evidente que afrontan las personas que invocan un traslado, esto es, la angustia y preocupación luego de trabajar por 20 o 30 años, y ven que su congrua subsistencia se ve en riesgo para enfrentar una etapa de su vida como lo es la vejez.

Frente a la pretensión de perjuicios, el apoderado de PORVENIR adujo en su recurso de apelación que en la actualidad no se ha ocasionado ningún perjuicio a la demandante, pues ésta no ha cumplido los requisitos para arribar a la edad de pensión, se desconoce si efectivamente la accionante va a seguir realizando cotizaciones o si llegare a faltar; por lo que es posible que se condene de manera previa a la entidad frente a un hecho futuro y eventual, que aún no se ha materializado. Que, aunque en la demanda la parte actora solicita perjuicios a cargo de los fondos por \$200 SMLMV, por la congoja y el menos cabo, no existe prueba sumaria de que la accionante se encuentra pasando un proceso de depresión o que se encuentre en una intervención psicológica con ocasión a la interposición de éste proceso.

En efecto, esta sala corrobora que la demandante en el acápite de pretensiones solicitó *“CONDENAR a los fondos privados demandados al reconocimiento y pago de los perjuicios morales causados a la parte demandante, los cuales estimo en 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o la suma que el juez considere”*

Ahora, el artículo 2.341 del Código Civil indica: *“el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido”*

A efectos de auscultar la eventual causación de perjuicios irrogados por las AFP demandadas a la demandante, al haberle hecho incurrir en error por ausencia de asesoría, advierte esta sala que tales perjuicios no se encuentran debidamente acreditados, en los términos que prevé el artículo 167 del C.G.P.

Frente al tema, la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia en sentencia SC093 del 2 de febrero de 2021, con radicación: 11001-31-03-044-2012-00385-01, M.P: *explicó que los elementos estructurales de la responsabilidad contractual son: “la existencia de un contrato válidamente celebrado, la lesión o menoscabo que ha sufrido el demandante en su patrimonio y la relación de causalidad entre el incumplimiento imputado al demandado y el daño causado”*. Y en la SC 397 del 22 de febrero de 2021, Radicación: 11001-31-03-036-2009-00278-01, expresó:

“La responsabilidad, en general, dimana del artículo 95, numeral 1º de la Constitución Política. Impone como deberes de la persona y del ciudadano «[r]espeter los derechos ajenos y no abusar de los propios».

El precepto recoge la máxima qui iure suo utitur, neminen laedere debet², según el cual, quien vulnere o incumpla sus obligaciones de conducta contractuales o extracontractuales, impuestas en interés de otro o de varios sujetos de derecho, debe reparar el daño producido.

La extracontractual, fundada en el artículo 2341 del Código Civil, establece la obligación civil de indemnizar los perjuicios provenientes de los delitos y las culpas. Exige para su estructura, al decir de la Corte: «una conducta humana, positiva o negativa, por regla general antijurídica; un daño o perjuicio, esto es, un detrimento, menoscabo o deterioro, que afecte bienes o intereses lícitos de la víctima, vinculados con su patrimonio, con los bienes de su personalidad, o con su esfera espiritual o afectiva; una relación de causalidad entre el daño sufrido por la víctima y la conducta de aquel a quien se imputa su producción o generación; y, finalmente, un factor o criterio de atribución de la responsabilidad, por regla

² El ejercicio de un derecho no debe lesionar otro derecho.

general de carácter subjetivo (dolo o culpa) y excepcionalmente de naturaleza objetiva (v.gr. riesgo)».

Así las cosas, para que prospere la indemnización por responsabilidad civil contractual o extracontractual, en cualquiera de sus modalidades, daño emergente, lucro cesante, perjuicios morales, fisiológicos o de vida en relación, se requiere de la prueba necesaria y suficiente del hecho, la culpa, el daño y del nexo causal entre el hecho culposo y el daño, sin que frente a tales supuestos opere la inversión de la carga de la prueba, como si ocurre con la ineficacia por falta al deber de información.

Entonces, teniendo presente su naturaleza resarcitoria, le corresponde a quien pretende su reconocimiento probar el daño o perjuicio ocasionado. Sobre este tópico la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Laboral y en sentencia SL1688 de 8 de mayo de 2019, radicación N° 68838, en un proceso de ineficacia de traslado de régimen pensional, precisó que ‘quien reclama la indemnización de perjuicios debe demostrarlos’, concluyendo en el caso lo siguiente: “1.3. Sobre la indemnización de perjuicios. **La Sala no accederá a esta pretensión, en la medida en que no existe en el expediente prueba cierta sobre los perjuicios ocasionados a la accionante, de la cual pueda derivarse una condena indemnizatoria.**” (Negrillas y subrayas de la Sala).

La Sala no accederá al reconocimiento de perjuicios, por cuanto finalmente, después de la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen de la demandante, la situación volvió a su estado inicial, y hoy la actora puede acceder a su derecho pensional en el régimen de prima media con prestación definida, lográndose así, el restablecimiento del derecho de la demandante en los términos que realmente corresponde, teniendo en cuenta los plazos en que acudió la actora a la acción de ineficacia, que era su carga hacerlo en forma oportuna, acción cuyos efectos están claramente decantados por la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia desde años atrás a la data en que se presentó ésta.

En último lugar, debe decirse que no le asiste razón al apoderado judicial de la AFP PORVENIR cuando solicita que se exonere de la condena en costas procesales impuesta por el A quo, por cuanto a su juicio, la entidad ha actuado

de buena fe y en cumplimiento de los deberes previstos en el ordenamiento jurídico. Para la Sala lo que se demostró en el sub lite, es que la administradora resultó vencida en juicio, de tal suerte que en dicho caso si resulta pertinente emitir condena en costas, acudiendo al criterio objetivo previsto en el art. 365 del CGP.

COSTAS

En esta instancia no se han causado costas procesales, por haber prosperado parcialmente las apelaciones, presentadas por los apoderados judiciales de las partes.

VIII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el numeral 4º de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, en el que se dispuso inaplicar la pérdida del régimen de prima media con prestación definida acaecido en la señora ANGELA MARIA RESTREPO SALDARRIAGA, cuando ésta se trasladó del seguro social a PROTECCIÓN S.A., y a PORVENIR S.A., declarando que la demandante sigue inmersa en el régimen de prima media con prestación definida, pero a cargo de la administradora de pensiones PORVENIR S.A, **para, en su lugar, DECLARAR LA INEFICACIA** del traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad, efectuado por la actora a través de PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A. entendiéndose, por tanto, que la demandante siempre ha permanecido afiliada al régimen de prima media con prestación definida administrado por COLPENSIONES, sin solución de continuidad, por lo indicado en precedencia.

SEGUNDO: REVOCAR los numerales 2º, 3º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11 de la parte resolutive de esa misma sentencia, en los que se declaró que la AFP PROTECCION S.A causó grave daño, perjuicio o menoscabo, es decir disminución o limitación a la seguridad social en pensiones de la demandante, se declaró la responsabilidad constitucional y profesional de las AFP demandadas, en el daño o perjuicio causado a la demandante en su mesada pensional, se absolvió de todas las pretensiones a Colpensiones, se le impuso a la AFP PORVENIR S.A. la obligación de reconocer la pensión de vejez a la demandante bajo las reglas de un régimen completamente ajeno a esa entidad y pagar un cálculo actuarial con fines de subrogación pensional a COLPENSIONES, y se ordenó a PROTECCION S.A., que dentro del mes siguiente en que le sea recobrado por escrito el 44%, del valor del cálculo actuarial pagado por PORVENIR a COLPENSIONES lo pague en favor esta PORVENIR; **para en su lugar, ORDENAR a la AFP PORVENIR S.A.,** trasladar a COLPENSIONES, todos los dineros que reposen en la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluyendo las cotizaciones completas con sus respectivos rendimientos financieros y comisiones por administración, fondo de garantías para pensión mínima y pagos de seguro y reaseguro. A su vez ORDENAR a la **AFP PROTECCIÓN S.A,** trasladar a COLPENSIONES, las cuotas de administración, las primas previsionales y los porcentajes del fondo de garantía de pensión mínima.

Asimismo, ORDENAR la **indexación** a cargo de las AFP demandadas **PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A.,** sobre las cuotas de administración, las primas previsionales y los porcentajes del fondo de garantía de pensión mínima,

Del mismo modo, ORDENAR a las administradoras, que dicho traslado se lleve a cabo por las **AFP PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A.,** dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, y que, tales entidades trasladen esos recursos a COLPENSIONES con la **relación discriminada de los conceptos,** con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primer grado.

CUARTO: ABSTENERSE de imponer costas procesales de segunda instancia, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.

QUINTO: En su oportunidad procesal, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

SEXTO: SE ORDENA la notificación por **EDICTO** de esta providencia, que se fijará por secretaría por el término de un día, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA